

¿Quién teme las listas abiertas?

ESTHER VERA

EL PAÍS - 12-11-2009

Vamos saliendo lentamente del espeso silencio político. Saliendo lentamente del estado catatónico en que se quedaron las cúpulas de los dos principales partidos, asistimos a una especie de sálvese quien pueda.

Se trata de una rara pero saludable carrera para recuperar la credibilidad ante los ciudadanos, que puede desatascar algunos problemas crónicos de la política catalana. Aunque sea por la presión del calendario electoral -por las peores razones se han tomado a menudo muy buenas decisiones- podríamos avanzar democráticamente.

La señal de alarma la activó la semana pasada el presidente del Parlament, que se expresó con la contundencia y la gravedad suficientes para ser escuchado, pero sin el respaldo partidario necesario para resultar convincente. Sin la expresión de una postura común del Gobierno y sin diálogo con la oposición, el presidente de la Generalitat ha decidido reservarse el liderazgo de la respuesta política. Después de pedir disculpas a los ciudadanos y rearmar la moral de la aturdida tropa en la convención municipal, el presidente ha anunciado desde el Gobierno medidas para mejorar la transparencia de la actividad pública. Se trataría de dificultar la corrupción y mejorar la transparencia en los ámbitos de urbanismo, las cuentas de los municipios y las fundaciones.

Espoleados por el escándalo, los políticos parecen obligados a tomar algunas decisiones, que según la versión oficial incluyen desbloquear la

ley electoral. A juzgar por el entusiasmo de las declaraciones de los últimos días, especialmente ayer en la sesión de control al Gobierno, la ley no se aprobaría con los dos tercios necesarios, sino por unanimidad y antes de un año. Sólo escuchando a los líderes parlamentarios, uno no se explicaría por qué no han cerrado un acuerdo en 30 años y Cataluña continúa siendo la única comunidad autónoma sin una ley electoral propia. Pero, ¡aleluya!, congratulémonos de que se abra, como mínimo, el debate.

La ley electoral ha sido imposible hasta el momento por la diferencia de intereses provocada por la distorsión de la distribución de escaños, que favorece a las circunscripciones menos pobladas. Por ello, los partidos con su voto concentrado en el área metropolitana (PSC, ICV, el PP y Ciutadans) son partidarios de un sistema proporcional o un sistema que iguale el valor del voto individual. En cambio, los partidos con su apoyo concentrado en otras circunscripciones defienden una mayor representación del territorio menos poblado. En la actualidad, un escaño vale en Lleida 25.000 votos y 60.000 en Barcelona.

Además de cuánto vale cada voto, otro de los temas peliagudos es la proximidad de electores y elegidos, que debilita el control de las cúpulas de los partidos. La clave de la nueva ley electoral estará en la proximidad entre votante y diputado -a la anglosajona-, que se puede favorecer con diversas fórmulas, ya sea la doble circunscripción alemana, que desaconsejan ahora los politólogos de cabecera a favor del sistema holandés por su complejidad y doble papeleta, o con pequeños distritos. Pero nadie discute que circunscripciones pequeñas -comarcas, veguerías o distritos solamente útiles electoralmente- permitirían al elector establecer una relación de confianza y control sobre *su* diputado.

También se deberán abrir las listas o como mínimo desbloquearlas. Que hubiera listas abiertas supondría que cada elector pudiera confeccionar su propia lista con candidatos de las diversas listas que se presentasen. Desbloquearlas significa poder variar el orden dentro de cada lista. Los detractores temen la competencia entre candidatos, que los ciudadanos agradecerían para superar la atonía tan recomendable para sobrevivir en los actuales partidos.

Los detractores aseguran que la experiencia del Senado no ha sido positiva, aunque cabría negar la mayor y por elevación preguntarse si el problema no son las funciones y la utilidad de la institución.

¿Quién teme las listas abiertas? Las cúpulas de los partidos que temen debilitarse y desconfían de la cultura política de los ciudadanos, aquellos que consideran débiles a los partidos. Se puede aceptar que los partidos españoles fueron débiles en la transición, cuando carecían de cuadros y experiencia, pero no ahora. Lo que se teme es la pérdida de control político y la decisión del ciudadano, que se percibe como falta de racionalidad política, sin atender que la desconfianza es grande respecto a las cúpulas de los partidos, que se perciben como burocráticas y contrarias a la pluralidad, más próximas al Politburó que al individuo participativo en red.